

TRADICIÓN LIBERAL, AUTORIDAD Y AUTORITARISMO¹

Daniel Pécaut

RESUMEN

El conflicto armado no es el único problema que enfrenta el régimen colombiano. Se añade a eso la dislocación de los partidos políticos que habían posibilitado, desde hace un siglo, la coexistencia de identidades compartidas, no obstante la debilidad de la simbología nacional. La elección de Uribe y la popularidad de su "política de firmeza" hacen temer una deriva autoritaria. La cultura política "liberal" heredada del pasado, basada en la desconfianza hacia la autoridad, las reglas informales y las transacciones, constituyen, sin embargo, un obstáculo a dicha tendencia. En octubre de 2003, el fracaso del referéndum y el avance de la oposición lo han demostrado nuevamente.

PALABRAS CLAVE: AUTORITARISMO, PARTIDOS POLÍTICOS, CONFLICTO ARMADO, LIBERALISMO, CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD.

ABSTRACT

The armed conflict is not the unique problem that the Colombian regime confronts. The breakup of the party system that had made possible the coexistence of shared identities for a century, despite the weakness of the national symbolism, the election of Uribe as president and the popularity of his "hard-line policy", have made possible an authoritarian outbreak. The "liberal" political culture of the past based on distrust towards authority, persistence of informal rules and resource of political transactions, constitute nevertheless, an obstacle to authoritarianism. And good examples of these were the failure of the referendum and the electoral advance of the opposition in October 2003.

SOBRE EL AUTOR

Daniel Pécaut es sociólogo, Director de Estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, donde dirigió el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales. Es responsable de la revista *Problèmes d'Amérique Latine* y autor de varios libros, entre los cuales *L'ordre et la violence*, *Histoire socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953*, Paris, Editions de l'EHESS, 1987 (versión en español: *Orden y violencia*, *Historia sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953*, 2ª edición, Bogotá, Norma, 2001) y *Violencia y Política en Colombia*, *Elementos de reflexión*, Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2003.

¹ Traducción: Evelyne Briffaut y Emmanuelle Barozet.

POLÍTICA

En muchos aspectos, Colombia parece estar a punto de sufrir una gran crisis política y social de magnitud comparable con las crisis que han afectado estos últimos años a varios países vecinos. A las dificultades asociadas con la conversión neoliberal, cabe añadir el drama de un conflicto armado interminable. Y, sea ésta o no consecuencia de lo anterior, una profunda crisis de representación afecta las instituciones, como lo atestigua la dislocación de los dos partidos políticos que han estructurado la sociedad durante un siglo y medio. La rápida pérdida de credibilidad de los últimos gobiernos demuestra que se plantea además un problema de gobernabilidad.

La movilización de la opinión que permitió el inesperado éxito de Álvaro Uribe Vélez en la elección presidencial de 2002, puede ser comparada en ciertos aspectos con las bruscas movilizaciones que han llevado al poder, en otros países, a líderes que parecían hacerse cargo de la indignación y emoción de las masas, aunque las hayan decepcionado rápidamente. Sin embargo, el populismo presente en el discurso de Uribe es mínimo. Predomina más bien el heroísmo, mediante un llamado incesante a solidarizarse en torno a un solo objetivo: modificar la relación de fuerzas en desmedro de las guerrillas. Según las encuestas de opinión, este discurso concita una notable aprobación de parte de la población: un año y medio después de asumir el poder, aunque sea criticado en otros temas, el 80% de los colombianos aprueba a Uribe en la prosecución de este objetivo.

Uribe se jacta de restablecer la autoridad perdida. De la búsqueda de autoridad al autoritarismo, no hay más que un paso. Además de hacer de la "firmeza" la clave de su política, tiende a concentrar todas las decisiones en sus manos y, con su distanciamiento de la clase política, a debilitar aún más los mecanismos de representación. En caso de que su proyecto frente a las guerrillas no obtuviera resultados rápidos, la huida hacia delante sería posible. El uribismo se transformaría entonces en otro fujimorismo.

La tesis que quisiera defender es que, sin embargo, esta deriva es menos probable de lo que a menudo se pretende. Cabe, en efecto, tomar en cuenta elementos contextuales que diferencian Colombia de los países vecinos: el peso de una tradición "liberal", un largo aprendizaje de desconfianza hacia la autoridad, formas de sociabilidad más democráticas de lo que se dice, el pluralismo de las elites. Los resultados de las dos elecciones de octubre parecen corroborar esta hipótesis: sin dejar de solidarizarse con la política del mandatario frente al conflicto armado, los colombianos han manifestado que su adhesión no equivale a un cheque en blanco.

En este artículo se hará referencia al conflicto armado y a las relaciones con los Estados Unidos, solo en segundo plano. Pero obviamente, no se pueden dejar de lado, siendo evidente que alimentan, más que la crisis de representación, la relación "carismática" con Álvaro Uribe.

1. Una larga tradición “liberal”

Casi todos los estudios sobre el régimen político colombiano en el siglo XX, ponen el acento en dos características: por una parte, la permanencia de subculturas formadas en torno a los dos partidos políticos “tradicionales”, el liberal y el conservador y, por otro lado, la combinación de orden y de violencia que marca numerosas fases de su historia. Estas dos características son inseparables. La división entre las subculturas partidistas ha originado innumerables fricciones e incluso guerras civiles, como el conflicto que hizo estragos en algunos departamentos de 1932 a 1934, y sobre todo la guerra civil conocida como *Violencia*, que sacudió gran parte del país de 1946 a 1960. Esta misma división ha dado origen entre los dos partidos a numerosos pactos destinados a restablecer un orden compartido, siendo el más duradero el acuerdo “Frente Nacional”, que puso fin a la *Violencia*, e instauró durante dieciséis años una rigurosa distribución del poder entre las dos formaciones partidarias. De hecho, este pacto se ha mantenido, durante diez años, con acomodos.

Ambas características han contribuido a la indudable precariedad de la simbología de la unidad nacional. La geografía de Colombia predisponía sin duda a esta situación, debido a las dificultades de comunicación entre regiones y a la amplitud de las zonas periféricas ocupadas, a medida que se iba expandiendo la colonización². Pero la división entre las subculturas partidistas ha sido un factor clave. Por largo tiempo, la identificación con los partidos políticos ha prevalecido sobre la identificación con la nación como tal. Transmitida de generación en generación, participando de la formación de espacios casi intangibles, esta identificación aseguraba la inscripción en dos comunidades políticas imaginarias, cada una atravesada por rivalidades entre clanes y clientelas, pero presas a enfrentarse en la primera ocasión. La recurrencia de episodios de violencia, que no golpeaban solamente las zonas periféricas, sino también a veces las zonas integradas a la economía nacional, contribuyó, por su parte, a alimentar las tendencias centrífugas y la desconfianza hacia un Estado que no lograba conquistar el monopolio de la violencia legítima, ni hacer sentir su autoridad sobre gran parte del territorio³.

² La historia social y política de Colombia es ininteligible si no se considera la magnitud del fenómeno continuo de la colonización y el papel que han desempeñado los antioqueños al respecto. Son quienes empezaron a conquistar las tierras del café a fines del siglo XIX, luego a ocupar los valles del bajo Cauca y del bajo Magdalena, a mediados del siglo XX. A partir de 1960, ocuparon la región del Uraba. El proceso de colonización continúa actualmente hacia las regiones amazónicas y los Llanos Orientales. Siempre ha sido acompañado por conflictos y las guerrillas actuales están más bien presentes en las zonas ocupadas durante los últimos decenios.

³ Me permito citar dos de mis trabajos: *L'ordre et la violence, Histoire socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953*, Paris, Editions de l'EHESS, 1987 (versión en español: *Orden y violencia, Historia sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953*, 2ª edición, Bogotá, Norma, 2001) y *Violencia y Política en Colombia, Elementos de reflexión*, Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2003.

POLÍTICA

Sin embargo, estas constataciones no deben opacar otra característica esencial para comprender el régimen colombiano: la tradición “liberal”, tanto en el plano político como económico, que predomina durante todo el siglo XX.

La afirmación es un tanto sorprendente. Instituciones como la Iglesia católica, la mayoría del partido conservador que se reclamaba de la “doctrina católica” –y especialmente la tendencia “laureanista”⁴–, numerosas corrientes en el partido liberal –como el gaitanismo⁵– nunca dejaron de rechazar las concepciones liberales. Esgrimían distintos argumentos: recalcaban el hecho de que se oponían a los valores trascendentales que solo pueden fundamentar el orden social, o en la amenaza que representaba el individualismo para la unidad del cuerpo social, o incluso, en los pretextos falsos de la “democracia formal”. Estaban de acuerdo, sin embargo, para rechazar cualquier visión cercana a las concepciones de Benjamin Constant, con su exaltación de la “Libertad de los Modernos”.

Si existe una tradición “liberal”, no es tan ideológica; es más bien el producto no deseado de las circunstancias y de la relación de fuerzas. Es el resultado de la débil autoridad y de la desconfianza que el Estado inspira, de la distancia social entre las elites y el resto de la sociedad y sobre todo de la pluralidad, e incluso de la fragmentación de los polos de poder. En resumidas cuentas, esta tradición nos remite a un sistema de *check and balance*, que no es institucional, sino *de facto*.

En comparación con la mayoría de los países de América Latina, ningún sector ha estado en condición, en el siglo pasado, de imponer la idea que la tarea de “organizar” la sociedad desde arriba le incumbiría al Estado. Con la prohibición de intervenir en política, los militares han sido

⁴ Laureano Gómez es la principal figura del extremismo conservador a partir de 1930. Partidario del franquismo, defiende a partir de 1938 el uso de la “acción intrépida” en contra del partido liberal. Después del asesinato de Gaitán, toma el control del partido conservador. A causa del clima de violencia paroxística que llevó en 1949 el partido liberal a no participar en las elecciones presidenciales, accede a la presidencia en 1950 y trata de imponer un régimen corporativista. Es derrocado en 1953 por el golpe de Estado del general Rojas Pinilla, que la mayoría de la opinión pública recibió al principio con alivio. En 1957, Laureano Gómez hace frente común con los liberales contra el régimen militar y participa en la creación del Frente Nacional en 1958.

⁵ Gaitán inició su carrera política en 1929, presentándose a veces como miembro del partido liberal y otras veces como disidente que se reclamaba de los sectores populares. En 1945, postula a la presidencia en contra del candidato del partido liberal y en nombre de la lucha contra la “oligarquía”. Esta división entre los liberales permite la elección del conservador Mariano Ospina Pérez en 1946. Al año siguiente, Gaitán toma la dirección del partido liberal, conservando, sin embargo, un lenguaje populista que galvaniza a las multitudes liberales. Fue asesinado el 9 de abril de 1948 y los motines que siguieron a su muerte, en Bogotá (el famoso “Bogotazo”) y en varias ciudades de provincia marcan un vuelco mayor en la historia del país. Para muchos colombianos, Gaitán es, desde entonces, una figura mítica.

relegados a un rol subalterno. El “civilismo”⁶ se ha transformado en una premisa central internalizada por casi todos. La competencia entre los dos partidos ha llevado a hacer de la limitación de las prerrogativas del Estado la principal garantía de la preservación de su hegemonía. Se fijó la duración de la mayoría de los mandatos electivos de manera a evitar –en principio al menos– todo riesgo de confiscación del poder, lo que además permitió a la amplia clase política disponer de más posibilidades de carrera⁷. En otras ocasiones, para frenar la convergencia hacia una confrontación violenta, se instauraron fórmulas de partición del poder –siendo el Frente Nacional el más reciente ejemplo–, que han reducido singularmente los márgenes de acción del Estado.

Al contrario de lo que se dice a menudo, la profunda distancia social no se debe a la existencia de una “oligarquía” particularmente poderosa. La formación de una oligarquía rentista estuvo limitada por una parte por el desarrollo económico muy tardío de Colombia (el cual comienza solamente en los años 1920), que se produjo a partir del cultivo de café y en el cual el rol de medianos y pequeños campesinos era importante, y por otra parte, por la ausencia de enclaves mineros capaces de generar ingresos significativos. De la misma manera, la distancia social se reforzó mucho más debido a la presencia de ambos partidos políticos, lo que constituyó un obstáculo al surgimiento político autónomo de las clases medias y populares. Unas y otras han debido o afiliarse a estos partidos o marginalizarse. Más tarde, la misma división partidista haría fracasar las movilizaciones populistas. Si las elites socioeconómicas han conservado su supremacía –y la relación jerárquica que ésta implica–, es por la imposición de las subculturas partidistas y por la red de intermediarios políticos presente en todo el país.

Hablar de subculturas partidistas no significa que los partidos estaban unificados. Siempre estuvieron divididos en una multiplicidad de tendencias y clanes, que reflejan, más que corrientes opuestas, la diversidad de los intereses regionales y de las clientelas personalizadas. El carácter elitista del régimen ha ido a la par de la diseminación de los poderes.

El “liberalismo-político” es ante todo el efecto de la división y fragmentación política; no ha dado nacimiento a una noción fuerte de ciudadanía, ni siquiera civil o política: durante décadas son las lealtades colectivas –tradicionales en algunos casos, modernas en otros– las que fueron los

⁶ Entendido como la primacía absoluta de las elites civiles. El derrocamiento del general Rojas Pinilla, en 1957, reforzó dicha primacía. En un discurso famoso, Alberto Lleras, primer presidente del Frente Nacional, confirió al civilismo su carácter fundacional, al negar a los militares cualquier función deliberativa.

⁷ En ciertos momentos, en el siglo XIX, el mandato presidencial tuvo una duración de dos años. Durante la mayor parte del siglo XX, para los representantes en la Cámara y los alcaldes, los mandatos tuvieron una duración de dos años.

POLÍTICA

cimientos de la participación en la vida política. Sin embargo, no es pura apariencia: por lo menos, en base a la desconfianza hacia el Estado y a las rutinas electorales, nació cierto apego de hecho a las “libertades negativas” y una actitud de sospecha con respecto a las derivas autoritarias. Ni Laureano Gómez, cuando quiso instaurar en 1950 un régimen corporativista, ni el general Rojas Pinilla, cuando pretendió en 1954-55 establecer una dictadura, duraron mucho tiempo. No es casual que Colombia se haya salvado, en los años 1964-1980, de la implantación de un régimen burocrático-autoritario. Frente al conflicto actual, por lo menos hasta la elección de Álvaro Uribe, los candidatos que propusieron recurrir a la fuerza no obtuvieron sino un número ínfimo de votos.

De la misma manera, el “liberalismo económico” es más pragmático que doctrinario. Se acomodó sin dificultades hasta 1990 con un fuerte proteccionismo, pero se tradujo en demostrar cierta preocupación por contener las otras formas de intervencionismo. En 1950, el gasto y la inversión pública se sitúan en la mitad del nivel alcanzado por países con un grado de desarrollo comparable. Una de las razones de esta orientación proviene de la voluntad de los empresarios de no ser implicados en las diversas convulsiones políticas. Se trata, además, de otra modalidad de división entre los poderes: si bien las elites económicas y políticas se confunden a menudo en el nivel más elevado, no ocurre lo mismo en los otros niveles. Protegidas de las presiones populistas, han impuesto una gestión macroeconómica ortodoxa y prudente que, a falta de permitir una transición hacia la industrialización en profundidad, se ha traducido por un crecimiento relativamente sostenido –incluso durante la “década perdida” de los años 1980, cuando fue el más rápido del subcontinente, incluso más que el crecimiento chileno–, y ha evitado los sobresaltos ligados al endeudamiento y a las inflaciones descontroladas. La ósmosis que se produjo recientemente entre una tecnocracia muy calificada y los empresarios no ha hecho sino consolidar las cualidades del modelo, y al mismo tiempo su mayor defecto: el dejar subsistir, incluso agravarse, las desigualdades.

El correlato del liberalismo es, en principio, el reconocimiento de la importancia simbólica de la regla de derecho. A juzgar por la impregnación de las relaciones sociales colombianas con el lenguaje jurídico y, más allá, por las frecuentes referencias al estado de derecho, Colombia no es una excepción. Es allí donde uno encuentra, sin embargo, las huellas de la dialéctica entre orden y violencia: el estado de excepción, que autoriza medidas particulares de orden público, y la acción gubernamental mediante decretos, han estado vigentes de manera casi permanente desde fines de los años 1940 y forman así parte de la normalidad institucional. Además, una parte de las relaciones sociales ha estado efectivamente regida por confrontaciones que involucran a veces a los actores privados, otras veces a los poderes públicos.

Dos regulaciones prevalecen de esta manera, no separadas sino mezcladas: una formal y otra informal. La segunda no tiene menos influencia que la primera; al contrario, contribuye más a la definición de los contextos normativos en los cuales se enmarca gran parte de la población, así como a los “recursos de acción” puestos a disposición de los actores organizados, sean éstos el uso de la fuerza o de las “transacciones” circunstanciales. El Frente Nacional constituye el ejemplo más claro de transacción institucional, pero muchos otros tipos de transacciones están constantemente en ejecución en todos los ámbitos de la vida social. Uno puede ver aquí una manifestación más del “liberalismo”: el campo social adquiere parcialmente el aspecto de un mercado donde se miden los “recursos de acción”; un mercado controlado no por una mano invisible, sino por manos muy visibles.

Queda lo esencial: se trata de un sistema complejo de interacciones fluidas que, por mucho tiempo, se ha conformado solamente por intermedio del imaginario transmitido por los dos partidos políticos. Se trata por lo tanto de un sistema en conexión directa con la segmentación social y al mismo tiempo atravesado de parte a parte por la política, sumamente alejado de cualquier esquema de Estado autoritario, sea o no burocrático.

El problema consiste en saber lo que puede subsistir cuando dicho imaginario desaparece y cuando el rechazo de la política pasa a ser el motor principal de la política.

2. La fragmentación de las organizaciones partidistas

En los años 1980, las subculturas partidistas parecían todavía intactas. Un estudio publicado en 1989 muestra que entre 1972 y 1982 el porcentaje de municipios donde uno de los dos partidos tradicionales se imponía constantemente, lejos de retroceder en comparación con el periodo 1931-1939 o el periodo 1958-1972, había crecido hasta alcanzar un 93%. Más notable aún, el porcentaje de municipios donde uno de esos partidos ejercía un control “hegemónico” con más del 80% de los votos, alcanzaba en 1984 un 35%, o sea prácticamente lo mismo que en los años 1930. Mientras el partido liberal ganaba el 60% de los municipios entre 1972 y 1982, el partido conservador se adjudicaba el otro 40%⁸.

Es cierto que esta situación se observaba sobre todo en los municipios rurales donde los “caciques” ejercían fácilmente su influencia. A nivel nacional, es decir incluyendo las ciudades, el desgaste de los partidos

⁸ Véase Patricia Pinzón de Lewin, *Pueblos, regiones y partidos*, Bogotá, Edición Unian-des, 1989.

POLÍTICA

era perceptible. Las tasas de abstención, que siempre habían sido elevadas⁹, tendían a aumentar y fluctuaban, incluso en las elecciones presidenciales, en torno a un 50%. Durante la elección presidencial de 1978, la abstención alcanzó un 60%. Mientras el partido liberal seguía dominando el escenario, el partido conservador mostraba signos de debilitamiento¹⁰. El éxito de dos conservadores en las elecciones presidenciales de 1982 y de 1998¹¹ demuestra sobre todo el aumento progresivo de votos de opinión circunstancial y de líderes políticos “independientes”.

Varios factores han contribuido a la erosión de los partidos, proceso en el cual, sin duda, la expansión del conflicto armado solo tendría una responsabilidad limitada. Incluso, se puede afirmar que ha inducido a una franja del electorado a participar en la votación para expresar su rechazo a las guerrillas. La corrupción provocada por la economía de la droga ha tenido, sin duda, un efecto más marcado, al aumentar el descrédito de la clase política. Pero existen otros factores más importantes que habrían influido incluso fuera de este contexto. Se acaba de mencionar el voto urbano: queda claro que la urbanización y los avances de la educación tenían que provocar el surgimiento de un electorado más volátil. Por cierto, las formas modernas de clientelismo que se implantan en los barrios periféricos de las ciudades, ya no corresponden a un clientelismo articulado indirectamente con los líderes nacionales, sino a un clientelismo “utilitario” y volátil desarrollado por políticos locales¹². El “voto cautivo” tiende a desaparecer¹³. Por otro lado, ambas subculturas no podían sino perder su influencia desde el momento en que su papel fue limitado a una simple repartición de puestos públicos en el marco de una coalición permanente.

Sin lugar a duda, los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias –aunque los candidatos adoptan frecuentemente una etiqueta

⁹ Una leyenda tenaz plantea que, debido a la movilización suscitada por el movimiento gaitanista durante la elección de 1946, la participación fue particularmente elevada. De hecho, fue solamente de un 56% de los electores inscritos. Véase Jonathan Hartlyn, *La política del régimen de coalición, La experiencia del Frente Nacional en Colombia*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993, p.198.

¹⁰ Véase Mónica Pachon, “Partido conservador y sus dinámicas políticas”, in Francisco Gutiérrez *et al.*, *Degradación o cambio, Evolución del sistema político colombiano*, Bogotá, Norma, 2002, pp. 79-130.

¹¹ Se trata de Belisario Betancur y Andrés Pastrana, quienes prometían llegar a una solución política al conflicto armado.

¹² Véase Francisco Gutiérrez, “Los partidos políticos y la democracia en Colombia (1958-2002), Una historia natural del vicio y de la virtud”, in *Problèmes d'Amérique latine*, N° 49, verano 2003, pp.39-70 y Elisabeth Ungar Bleier, “Colombie: les élections de 1997-1998, entre changement et continuité”, in *Problèmes d'Amérique latine*, N° 31, oct-dic 1998, pp. 25-50.

¹³ Desde fines de los años 1990, este toma, en las zonas rurales, otro aspecto: las guerrillas y sobre todo los paramilitares “orientan” los votos en las zonas que controlan. En 2002, los paramilitares se jactaron, con mucha exageración, de haber influido en la elección de un tercio de los representantes en la cámara.

ad hoc— pueden dar la sensación que los dos partidos conservan un casi-monopolio. Por ejemplo, en las elecciones senatoriales, sus candidatos congregan todavía el 84,4% de los votos en 1994 y el 79,9% en 1998. Sin embargo, la realidad es otra: la organización de los partidos está en plena delicuescencia y, detrás de las apelaciones tradicionales, permanece solamente una proliferación de “microempresas” electorales personales¹⁴ que ya no representan estrategias colectivas de partidos, sino tácticas generalizadas de *free riders* (si el término tiene todavía un sentido cuando ya no existen organizaciones ni reglas comunes).

Basta considerar la evolución del número de listas para tener una idea de la fragmentación provocada por este fenómeno.

CUADRO N° 1

Evolución del número de listas electorales (1974-1998)

Año	Senado	Cámara
1958	67	83
1960	-	113
1962	97	143
1964	-	192
1966	147	215
1968	-	221
1970	206	316
1974	176	253
1978	210	308
1982	225	343
1986	202	330
1990	213	351
1991	143	486
1994	251	628
1998	319	692

Fuente: E. Pizarro Leongómez, in F. Gutiérrez Sanin, *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*, 2002, pp. 357-401.

¹⁴ El término es ampliamente utilizado en los diversos trabajos de Eduardo Pizarro Leongómez sobre los procesos electorales colombianos. Véase por ejemplo el capítulo “La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales”, in Francisco Gutiérrez *et alii*, *Degradación o cambio. Evolución del sistema político colombiano*, *op. cit.*, pp. 357-401. Debo en gran medida al autor las observaciones que presento aquí.

POLÍTICA

Hubo varias etapas en esta evolución. Comenzó cuando los dignatarios nacionales de los partidos, ex presidentes y/o miembros de los grandes linajes políticos, comenzaron a ver desmoronarse su autoridad en beneficio de los “barones regionales”, susceptibles de ofrecer mejores gratificaciones a los electores. Continuó cuando el poder de los “barones” a su vez se debilitó, dejando lugar a pequeños mercados electorales locales. Se acentuó con las medidas de descentralización adoptadas en 1985-86 que, al instaurar la elección mediante sufragio universal de los alcaldes, los sustrajo a la influencia de los gobernadores y los alentó a buscar su propia clientela.

La Constituyente elegida en 1991 pretendió frenar esta tendencia en el sistema electoral, al instaurar listas constituidas a escala nacional para las senatoriales, mientras los diputados serían elegidos en base a listas departamentales. La medida fue totalmente contraproducente. La fragmentación llegó al extremo. Los senadores, de hecho, continuaron siendo elegidos sobre bases locales, pero con porcentajes más ínfimos todavía. Pocos alcanzaron el umbral mínimo, siendo la mayoría elegida gracias al cálculo de “residuos”¹⁵. Esto se debe en parte a efectos no deseados de otras disposiciones de la Constituyente que apuntaban a la democratización del escenario político, como la reducción del número de firmas exigidas para crear un partido, con el fin de facilitar el surgimiento de formaciones desligadas de los partidos tradicionales¹⁶; la instauración de la elección de los gobernadores mediante sufragio universal (que prolonga la descentralización iniciada con la elección al sufragio universal de los alcaldes); la transparencia de las prácticas electorales, poniendo a disposición del sufragante un *tarjetón* donde figura el nombre de las cabezas de listas, mientras la práctica anterior consistía en distribuir, a la entrada de los locales de votación, papeletas con una sola lista¹⁷. Cabe agregar la prohibición de la reelección de los presidentes de la República, que les resta gran parte de la influencia que tenían hasta ese entonces.

Dichas disposiciones no explican por sí solas la proliferación de listas, que resulta también de la incapacidad de los estados mayores de los partidos para seleccionar a los candidatos: tanto por cálculo estratégico, con el fin de ganar más electores al ampliar su oferta electoral, como por

¹⁵ Es decir, no alcanzan la cifra mínima que resulta de la división del total de votos por el número de escaños.

¹⁶ La Constitución de 1991 estableció que, para ser legalmente reconocidos, los partidos necesitan 50.000 firmas o al menos un representante en el Congreso.

¹⁷ El sistema anterior permitía todo tipo de manipulaciones y control. Eran los partidarios de una lista (incluso la cabeza de lista en los pueblos rurales) quienes entregaban la papeleta al elector, dándole el control a los primeros. En adelante, en el caso de una elección senatorial por ejemplo, el sistema del *tarjetón* implica que se le entrega a cada elector un cuadro con la fotografía y el nombre de más de 600 cabezas de lista.

necesidad, pues a falta de medios para preservar una disciplina organizacional, se limitan a entregar un aval puramente formal a las listas que se reclaman del partido y cada formación puede de esta manera postular con una multitud de listas. Al fin y al cabo, lo que importa es la personalidad de quien encabeza la lista¹⁸ y, por supuesto, los recursos financieros de los cuales dispone. Confrontados al descrédito de la clase política, numerosos candidatos optan por definirse como “independientes”, incluso cuando han realizado su carrera dentro de uno de los partidos. La dispersión y la personalización consiguientes no se pueden comparar con ningún país del mundo, salvo, tal vez, con Israel¹⁹.

Si la dislocación de los partidos tradicionales no ha sido percibida como una crisis mayor, es porque existe, a pesar de todo, un remanente de las subculturas partidistas: a la hora de votar, numerosos electores todavía se remiten a ellas, aunque sea por listas personalizadas. Además, los partidos tradicionales siguen afirmándose como tales en el congreso y, por lo tanto, siguen apareciendo como hegemónicos. La oposición no ha logrado hasta ahora más que fugaces apariciones a nivel nacional²⁰. Sin embargo, la confianza en los dos partidos no ha dejado de disminuir y durante las elecciones presidenciales, el éxito de sus candidatos se debe sobre todo a un voto puntual de opinión, muy pronto seguido por una rápida desilusión. César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana lo han experimentado desde 1990.

El desgaste de los partidos afecta en todo caso la gobernabilidad. Los presidentes y los gobernadores están expuestos al chantaje del congreso y frecuentemente obligados a negociar día a día el apoyo personal de los congresistas. Las transacciones ya no conciernen a sectores o grupos de interés; son ahora interpersonales y la corrupción no está muy lejos.

3. La crisis de gobernabilidad: síntomas y límites

Existe la tentación de mencionar una posible crisis política catastrófica, similar a la crisis que se desencadenó en Perú después de Alan García

¹⁸ Esto no significa que, después de la elección, el elector sepa quién lo representará efectivamente en el Congreso. A pesar de una disposición contraria de la Constituyente, quienes han sido elegidos conservan la facultad de entregar su puesto a un suplente, durante parte de su mandato –o incluso a una serie de suplentes–, lo cual es una manera de ampliar su clientela y su electorado a escala individual.

¹⁹ Según E. Pizarro Leongomez, art. cit.

²⁰ La Unión Patriótica, partido creado en 1985 por el partido comunista y las FARC, ha sufrido una trágica suerte con el exterminio de 2.000 de sus cuadros. La Alianza Democrática M19, constituida por el M19 después de su desmovilización en 1990, efectuó un brillante avance en la elección presidencial de 1990 y, más aún, con ocasión de la elección de la Constituyente en 1991, en la que casi empató con el partido liberal: su decadencia fue luego tan rápida y espectacular como su auge. Durante las elecciones senatoriales, las “terceras fuerzas” –muy heteróclitas– no lograron más que el 13,5% de los votos en 1994 y el 20,1% en 1998.

POLÍTICA

o en Venezuela después de la dislocación del sistema AD-COPEI. Sin embargo, la comparación no es obvia.

De 1994 a 1998, Colombia, cuyo presidente, Ernesto Samper, había sido puesto en cuarentena por Estados Unidos²¹ y por una facción importante de las elites dirigentes, sufrió un vacío de poder al más alto nivel sin que el funcionamiento institucional, sin embargo, se interrumpiera. El país pasó en el plano internacional bajo un régimen de libertad condicional, sobre todo después del lanzamiento del Plan Colombia, sin que eso suscitara, por lo demás, mayores reclamos. A partir de 1995, se ha dado un proceso de empobrecimiento de la mayoría de la población y de exacerbación de las desigualdades –ya muy profundas–, pero los movimientos de protesta permanecieron limitados²². En 1998-99, Colombia tuvo por cierto que enfrentarse por primera vez a una crisis fiscal y a un endeudamiento externo preocupantes, que se tradujeron en una fuerte recesión, pero no se puede hablar de que hubo una pérdida de control de la gestión económica. Finalmente el conflicto se amplificó, debido a que, de 1995 a 1998, las guerrillas impusieron humillantes derrotas de las fuerzas armadas, y los paramilitares extendieron luego su control sobre gran parte del país con la complicidad, a menudo, de las fuerzas armadas. Esto no impidió que el gobierno lanzara, en 1998, un nuevo “proceso de paz” y que numerosos sectores de la población creyeran en él.

Para entender estas paradojas, conviene volver a las características de lo que llamé antes un sistema complejo de interacciones fluidas, que implica varias formas simultáneas de regulación; el efecto más notable consiste en que las tensiones no convergen todas ni remontan fácilmente hacia el “centro”. El sistema suscita siempre “periferias” en las cuales las regulaciones informales se imponen sobre las regulaciones formales; periferias espaciales que corresponden a la incapacidad del Estado de imponer su presencia sobre todo el territorio, incluso sobre importantes polos de producción²³; pero también periferias sociales con la pauperización de inmensos sectores de la población. Además, el narcotráfico y el conflicto armado han contribuido a su crecimiento. Sin embargo, la descentralización y el clientelismo permiten paliar ciertas consecuencias, al atenuar las presiones sobre el Estado central sin romper los lazos institucionales entre lo local y lo nacional. La precariedad del Estado tiene como corolario su maleabilidad. Si las instituciones públicas, que siempre han sido frágiles, sufren los contragolpes de la corrupción y de la violencia, el Estado solo es parcialmente afectado en sus otras funcio-

²¹ Debido a la participación del cartel de Cali en su campaña.

²² Es evidente que esta situación se debe ante todo al conflicto armado y al avance de los grupos paramilitares que han acallado casi por completo la capacidad de protesta.

²³ En estos últimos años, se empezó a explotar numerosos recursos mineros y agrícolas provenientes de regiones donde el Estado estaba poco presente.

nes. En este aspecto, no se parece, ni de lejos, a un *collapsed state*, ni siquiera a un Estado tambaleante como en los países vecinos.

Pero existe otra razón que explica la mantención de una relativa gobernabilidad: el régimen no ha permanecido inmóvil, sino que ha conseguido dotarse, al menos en el plano simbólico, de otros medios de legitimación. La Constituyente de 1991 no solo ha promovido la descentralización y modificado el sistema de partidos; también ha originado una nueva concepción de los derechos y de la sociedad civil.

Como muchas otras constituciones recientes de América Latina, la Constitución de 1991 contiene una enumeración de derechos de todos los tipos y generaciones. Instauro, además, junto a antiguas instancias judiciales, una corte constitucional con atribuciones muy amplias. Ver solamente en esas innovaciones la reiteración de la fe en las construcciones jurídicas sería dejar de lado otro aspecto: si bien estas innovaciones no refuerzan necesariamente el Estado de derecho, sientan las bases de una “sociedad de derechos”. El Estado de derecho supone una unidad jurídica y una jerarquía de normas; una sociedad de derechos, por el contrario, abre espacio a una heterogeneidad de normas²⁴ y pretende retranscribir las necesidades en términos jurídicos. La Constituyente crea también los medios para hacer valer estos derechos. El “derecho de tutela” da la posibilidad a cada individuo de dirigirse al juez si estima que sus derechos fundamentales han sido atropellados²⁵. La corte constitucional tiene atribuciones en todas las materias y no vacila en tomar decisiones que pueden significar consecuencias económicas serias²⁶. El derecho administrativo es particularmente sofisticado y el Estado tiene que pagar, cada año, por concepto de daños y perjuicios, sumas que equivalen actualmente al 4% del presupuesto anual y deberían llegar a un 10% en 2005, según recientes estudios. Se asiste, pues, a un fenómeno de extrema “judicialización” de la vida social, fenómeno bastante caótico a causa de la rivalidad entre los diversos tribunales y de las interferencias con la política. No obstante, es el juez, más que el legislador, quien vela por la legalidad²⁷.

²⁴ Recojo esta distinción en Guy Carcassone, “Société de droits contre État de droit”, in *Mélanges en l'honneur de Guy Braibant*, Paris Dalloz, 1996. A propósito del caso colombiano, véase también los varios trabajos de Jean-Michel Blanquer, en especial: “Colombie: les droits sans l'État”, in *Problèmes d'Amérique latine*, N° 44, primavera 2002, pp.49-62.

²⁵ Las miles de “tutelas” presentadas cada año llevan a los jueces a dar a casos idénticos respuestas muy diferentes. La corte constitucional intenta a veces poner un poco de orden. El derecho de tutela vale incluso contra las sentencias judiciales, y en febrero de 2004 la corte constitucional decidió autorizar el uso del derecho de tutela frente a decisiones de la corte suprema de justicia, lo que puede provocar un gran desorden jurídico.

²⁶ En numerosas ocasiones, la corte constitucional obligó al gobierno a adoptar medidas económicas costosas. En febrero de 2004, presentó un ultimátum al gobierno para que pusiera en ejecución un verdadero programa de ayuda a las poblaciones desplazadas.

²⁷ J.M. Blanquer; *op. cit.*, p. 56. La corte constitucional evita, sin embargo, oponerse de manera frontal a las grandes opciones políticas del gobierno. Ratificó la decisión de Álvaro Uribe de recurrir al “estado de emergencia” (el “estado de conmoción” interna

POLÍTICA

El descrédito de la política va también a la par de la valorización de la idea de “sociedad civil”. Las disposiciones adoptadas por la Constituyente no son ajenas a este proceso y se traducen por una gama completa de mecanismos participativos. Sobre todo, han conducido a la afirmación del carácter multicultural del país: el consiguiente reconocimiento de derechos específicos para las poblaciones indígenas y negras no atañe solo al ámbito cultural y político, sino también a la delimitación de las tierras. Las repercusiones de esta lógica de reconocimiento se extienden mucho más allá de ambos grupos. La sociedad en su conjunto, se supone, debe alcanzar ahora, cada vez más, sus propios modos de representación.

Uno podría sostener que esos cambios son ilusorios. Los casos de violación de los derechos humanos, de impunidad, de disfunción del aparato judicial, nunca han sido tan numerosos como en los años 1990. ¿Cómo hablar de “sociedad civil” mientras gran parte de la sociedad concreta, sometida a las presiones de los actores armados, está silenciada y que la propia existencia de un espacio público puede ser cuestionada? Encontramos de nuevo la yuxtaposición del orden y de la violencia, del derecho y de su trasgresión socialmente aceptada, de la participación y de la exclusión social, que marcaron la historia colombiana, aunque sea en diversos grados según la época.

Quedarse con esta visión, significaría, sin embargo, ignorar la modernización relativa inducida por estos cambios. La “tutela” es también un medio para hacer valer un derecho de ciudadanía. La referencia a las identidades culturales está presente ahora en las reivindicaciones de autonomía y la resistencia frente a los actores que recurren solamente a la fuerza. Prueba de esto, es que las estrategias de las poblaciones indígenas del Cauca, departamento que constituye uno de los epicentros del conflicto en estos últimos años, se han convertido en modelo para varios otros sectores. El surgimiento de la sociedad civil salta a la vista en algunos municipios, a través de la concertación entre los habitantes y los ediles. Al respecto, el caso de Bogotá es particularmente impresionante: desde hace más de diez años, los sucesivos alcaldes han logrado combinar una gestión sumamente eficiente con medidas sociales dirigidas. La política de *convivencia* aplicada durante sus dos mandatos por Antanas Mockus, ha contribuido a la baja de la tasa de homicidios en la capital de un 57 a un 27% en unos cuantos años. Antanas Mockus es, además, el mejor ejemplo de la generación que surgió al margen de los partidos políticos²⁸.

que reemplaza desde 1991 al “estado de sitio”) aunque limitándolo. En julio de 2003, ratificó igualmente su decisión de aprobar una reforma constitucional por vía de referéndum, pero impuso que se modificara el proyecto inicial.

²⁸ Matemático y filósofo, Mockus se destacó como rector de la Universidad Nacional, la casa de estudios más importante de Colombia, función en la cual se desempeñó con rigor y anticonformismo a la vez. Demostró las mismas cualidades durante sus dos mandatos como alcalde de Bogotá, de 1996 a 1998 (renuncia entonces para presen-

Sigue prevaleciendo una visión ampliamente liberal. Pero ya no es exactamente la misma. El desencanto con respecto a la representación política acarrea un vuelco idéntico al que se constata en otras partes, con los avances de la democracia de opinión y de las lógicas de reconocimiento.

4. La ruptura uribista: la política de “firmeza”

El éxito de Álvaro Uribe Vélez en la elección presidencial de 2002 es propio de un *outsider*. Si bien estaba lejos de ser desconocido, habiendo ocupado como candidato del partido liberal, entre otros, las funciones de alcalde de Medellín, senador, gobernador de Antioquia, su fama no traspasaba las fronteras provinciales y disponía solo de un apoyo limitado entre las filas del partido. A pocos meses del escrutinio, no parecía ser capaz de superar a sus competidores, en particular a Horacio Serpa, candidato oficial del partido liberal, quien estaba, a diferencia de Uribe, muy ligado a todas sus redes. Además, su gestión como gobernador fue objeto de críticas, debido al impulso que había dado a las *Convivir*, asociaciones legales de vigilancia local acusadas de servir de pantalla a los paramilitares. Sin embargo, ganó en la primera vuelta con un 53% de los votos, contra un 31,8% para Horacio Serpa.

Esta verdadera movilización de la opinión termina de sacudir las lealtades partidarias. No se debe ni a un encanto personal de Álvaro Uribe, ni a cierto resabio de populismo. ¿Sería que el mensaje de firmeza e intransigencia frente a las guerrillas acarreó la adhesión de la población? El personaje se esconde detrás de ese mensaje o se confunde con él. En este sentido su influencia es verdaderamente de tipo carismático, es decir, como lo señala Weber, proviene del hecho que Uribe encarna a los ojos de sus adeptos una fuerza que impone respeto. Weber subraya que la autoridad carismática, en especial cuando proviene de la “potencia heroica”, se agota si “el éxito le es prolongadamente negado”. En el transcurso de dieciocho meses, Uribe no ha tenido solo éxitos: la derrota en el referéndum del 25 de octubre de 2003²⁹ y las medidas de austeridad económica estuvieron a punto de hacer tambalear la relación carismática. Sin embargo, no ocurre lo mismo de su vocación esencial, que consiste en modificar la relación de fuerzas con las guerrillas. En este contexto, ha obtenido éxitos innegables y la relación carismática permanece intacta. A comienzos del año 2004, tomando solamente en cuenta la política de “seguridad”, el nivel de popularidad de Uribe roza el 80%, cifra inigualada en Colombia y solo comparable con la popularidad de Fujimori en los primeros tiempos de su gobierno.

tarse a la elección presidencial de 1998) y de 1999 a 2002. La modernización a la cual sometió Bogotá, especialmente en los sectores del transporte y de la cultura, el uso de la simbología de la “convivencia” pacífica, su reconocida honestidad personal, su distancia con respecto a cualquier tipo de clientelismo, hacen de Mockus un personaje sin equivalente en el escenario político colombiano.

POLÍTICA

La línea dura frente a las guerrillas es mucho más que un mero problema de estrategia militar; orienta prácticamente toda la política interna. El apoyo de la opinión es también mucho más que una simple y fugaz inclinación: implica una ruptura con la cultura política habitual de transacción, cultura que se traducía desde hacía veinte años por la mezcla de confrontaciones y de negociaciones, es decir, un estado prolongado de “ni guerra ni paz”. Por lo demás, el éxito de Uribe había sido precedido por un alza de la popularidad de las Fuerzas Armadas, igualando la de la Iglesia católica. Si bien el “civilismo” no es cuestionado –como lo demuestra la derrota de los militares tentados por la política– se trata cada vez más de un civilismo agresivo.

Esta evolución se debe inicialmente al completo fracaso del proceso de paz iniciado por Andrés Pastrana. Las diversas concesiones, comenzando por el otorgamiento a las FARC de una vasta zona desmilitarizada, no fueron correspondidas. Lejos de manifestar una voluntad de llegar a acuerdos, las guerrillas trataron de aprovechar esas concesiones para reforzar su potencial militar. Si bien la opinión pública le reprocha a Pastrana sus improvisaciones, atribuye la responsabilidad del fracaso a las guerrillas³⁰.

Paralelamente, la opinión pública se ha ido radicalizando. Las prácticas de las guerrillas –raptos indiscriminados, asesinatos de representantes locales y generalización de las amenazas en su contra, destrucción de aldeas, presiones sobre la población– provocan una exasperación creciente, que se manifiesta mediante el apoyo a las medidas de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y al Plan Colombia. Sólo una pequeña minoría se declara a favor de reanudar rápidamente las negociaciones y un ínfimo puñado sigue expresando su solidaridad con las guerrillas³¹.

La polarización se traduce sobre todo por el aumento de la tolerancia, incluso de la simpatía, hacia los paramilitares³² por parte de varios sectores³³. Conviene detenerse brevemente en este punto.

²⁹ Previsto por la Constitución de 1991, el referéndum no se había aplicado nunca.

³⁰ La derrota de Horacio Serpa se explica en gran medida por la percepción, de parte de los electores, de que iba a recurrir a la misma estrategia vacilante de sus antecesores.

³¹ El cambio de actitud de las ONGs de defensa de los derechos humanos es claro al respecto. Aunque siguen poniendo el acento en las violaciones cometidas por la fuerza pública, la mayoría menciona ahora los abusos de las guerrillas. Eso no les impedirá denunciar frontalmente la política de Uribe.

³² Frente a las guerrillas, desde el principio de los 80, se han formados grupos “paramilitares” locales, a iniciativa tanto de los narcotraficantes y de las Fuerzas Armadas como de los grandes propietarios o de todos estos actores a la vez. Sin embargo, solamente a partir de 1993 alcanzaron una envergadura nacional, efectuando operaciones hasta en los bastiones de las guerrillas. Desde 1998, ejercen su hegemonía sobre amplias regiones de Colombia, y hasta en las ciudades, generalmente con el asentimiento de los militares. Sus vínculos con el narcotráfico se han vuelto cada vez más estrechos. Contrariamente a las guerrillas, las diversas organizaciones paramilitares están lejos de ser unificadas. Desde que se iniciaron las negociaciones con el gobierno de Uribe, sus divisiones se han vuelto más visibles.

³³ Cabe subrayar que en las zonas más violentas, la votación en las elecciones presidenciales fue más bien una manera de protestar contra el poder de los grupos armados

Durante el proceso de paz, el hecho de mayor importancia ha sido la expansión de los paramilitares sobre gran parte del territorio. Sin duda, habían “reconquistado” anteriormente algunas regiones claves, en particular el Uraba. Pero eso no se compara con sus avances a partir de 1998: logran asentarse incluso en determinados bastiones de la guerrilla –como las zonas de cultivo de la coca, transformadas en epicentro de los enfrentamientos³⁴– y hasta en las periferias urbanas. Masacres, desplazamientos de población y otras formas de terror han sido los instrumentos de esta progresión.

Es evidente que este avance no hubiera existido sin el consentimiento o la colaboración activa de gran parte de la fuerza pública³⁵. Luego de sus derrotas de 1995-1998 frente a las guerrillas, esta podía sentirse tentada de dar rienda suelta a sus dudosos aliados. El hecho de que sea posible calificar esta colusión de “política de Estado”, como lo hacen muchas ONGs, plantea más interrogantes³⁶. Es difícil creer que “todo el Estado” se haya comprometido con esta orientación. Involucrados tanto en el combate contra el tráfico de drogas como en la lucha antisubversiva, los paramilitares –mucho menos unificados que lo que se decía– parecen haber gozado casi siempre de una considerable autonomía con relación a los militares. Más aún, es probable que hayan sido ellos quienes han influido a menudo sobre los militares, debido a su superioridad en términos de “eficacia”.

Desde el comienzo, a los paramilitares nunca les ha faltado tampoco el apoyo entre sectores de la población civil: criadores de ganado, comer-

ilegales que dominan a nivel local. En el Córdoba, bajo influencia paramilitar, Serpa ganó sobre Uribe, con 54 y 39% de los votos, respectivamente. En el Putumayo bajo influencia de las FARC, Uribe sobrepasa a Serpa con un 42 y un 37% de los votos, respectivamente. Esto relativiza la capacidad de los actores ilegales a orientar los votos o, más aún, demuestra que el voto sigue siendo percibido como un medio para preservar el derecho de expresión.

- ³⁴ Es necesario recordar que las FARC y los paramilitares participan cada vez más en la economía de la droga, desde hace mucho tiempo. Hace tiempo que las FARC ya no se limitan a exigir un impuesto a los campesinos, sino que participan en la elaboración y el transporte interno de la cocaína. En cuanto a los paramilitares, han mantenido desde siempre estrechos lazos con los carteles de la coca y se han financiado gracias a esta actividad. No es pues sorprendente que la “guerra” alcance su paroxismo en las zonas de cultivo y en los corredores de transporte.
- ³⁵ Cabe señalar que las fuerzas armadas están cada vez menos implicadas directamente en la violación de los derechos humanos (2 a 3% de los casos). Esto es, en gran medida, un efecto no previsto de la ayuda norteamericana, pues va a la par de una vigilancia creciente en este aspecto. Un ejemplo entre otros: los Estados Unidos harán todo lo posible en el 2003 para obtener la destitución del comandante de la fuerza aérea, a quien acusaban de encubrir a los responsables de un bombardeo contra campesinos. Eso no significa, evidentemente, que los casos de colusión de las fuerzas armadas con los paramilitares hayan disminuido.
- ³⁶ Está claro desde un punto de vista jurídico, que está comprometida la responsabilidad del Estado, “por acción u omisión”. Pero desde un punto de vista sociológico esto significa olvidar la complejidad de todo Estado y, en el caso colombiano, los límites de su autoridad.

POLÍTICA

cientes locales, cuadros políticos amenazados³⁷ –sin olvidar a los narco-trafficantes reconvertidos a actividades legales–. Pero a partir de 1998, tácita o explícitamente, aumenta el número de simpatizantes entre las clases medias y populares urbanas en las zonas de conflicto. En el primer caso, influye el cansancio frente a la “inseguridad”; en el segundo caso, el plegarse a quienes, después de haber hecho retroceder a los guerrilleros, cumplen la función de protectores.

Esto significa que el triunfo de Álvaro Uribe se debe solo de un modo secundario a la delicuescencia de los partidos. Se puede atribuir sobre todo a la coincidencia entre su discurso y la sensación de sectores enteros de la sociedad: la prioridad consiste en aplastar las guerrillas.

La “política de seguridad democrática” lanzada por el presidente es la manifestación de este objetivo³⁸. Apunta primero a la modernización de las fuerzas armadas. Dicha modernización se inició bajo el gobierno de Pastrana, con un aumento sustancial del presupuesto militar, que permitió multiplicar los efectivos profesionales. Uribe prosiguió en esta línea, creando nuevas unidades de elite especializadas y móviles, implementando la fuerza pública en los 200 municipios donde estaba ausente, fijando metas. Esta política se tradujo enseguida por medidas de destrucción a gran escala de los cultivos de coca y de amapola, con la ayuda de compañías privadas norteamericanas y con el propósito de lograr su eliminación total en cuatro años. Por último, la “seguridad democrática” consiste en la adopción de medidas de excepción mediante un “Estatuto antiterrorista”³⁹ y la instalación de dispositivos particulares en regiones conflictivas⁴⁰.

Esta política se inscribe en la continuación del Plan Colombia, puesto en marcha en el año 2000 y que asegura una parte importante de su financiamiento⁴¹. El plan ha hecho de la destrucción de los cultivos para la droga su objetivo central pero, desde fines del 2002, cierta cantidad de dinero fue oficialmente puesta al servicio de la lucha antiguerrilla. Con Uribe, más que con Pastrana, va a la par de una solidaridad incondicio-

³⁷ Todos estos grupos han estado muchas veces en connivencia en el asesinato de militantes de la Unión Patriótica, de sindicalistas y de defensores de los derechos humanos a partir de 1985.

³⁸ Analicé esta política en: *Midiendo Fuerzas, Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Bogotá, Planeta, 2003.

³⁹ La medida más controvertida de este estatuto consiste en otorgar poderes de policía judicial a la fuerza pública. Las ONGs no son las únicas en preocuparse; la Unión Europea expresó oficialmente su rechazo.

⁴⁰ La corte constitucional se pronunció en contra de esta medida, pero sigue siendo aplicada de hecho.

⁴¹ Según fuentes norteamericanas, la ayuda de Estados Unidos, en el marco del Plan, alcanza, de 2000 a 2004, un poco más de 2 mil millones de dólares. Solo Israel y Egipto reciben una ayuda superior.

nal con la acción internacional de los Estados Unidos. Uribe ha dado al respecto numerosas pruebas, entre otras el apoyo a la guerra de Irak, y ha ubicado su estrategia dentro del marco global de la “guerra contra el terrorismo”⁴².

La “seguridad democrática” recibe un amplio apoyo de parte de la población colombiana. Sus resultados no son despreciables: las acciones de las guerrillas han disminuido fuertemente, incluso los raptos, una parte de la red vial se ha vuelto más segura, las deserciones de guerrilleros han aumentado, los feudos de las FARC y del ELN ya no están a salvo. De hecho, las guerrillas han entrado en una fase de repliegue.

Sin embargo, otra vertiente de esta política es más controvertida: las negociaciones entabladas con la mayor parte de los grupos paramilitares luego de que éstos anunciaran un cese del fuego a fines del 2002. La improvisación en las conversaciones, la versión inicial del proyecto gubernamental que excluía el encarcelamiento de los culpables de crímenes, incluso de crímenes considerados contra la humanidad, la ausencia de procedimientos de verificación⁴³ –y si bien el número de masacres ha disminuido bastante, los asesinatos selectivos no han bajado tanto– son, entre otros, los aspectos que han suscitado reservas, no solamente por parte de gobiernos extranjeros, sino también por parte de muchos líderes de opinión en Colombia, dando la sensación que, decididamente, Uribe no daba el mismo trato a los dos bandos ilegales y parecía incluso sentirse cómodo con la prosecución de una paramilitarización discreta de parte del país⁴⁴.

A lo anteriormente dicho, se agregan otras dudas: el rechazo de toda concesión respecto de un intercambio entre personas secuestradas por la guerrilla y guerrilleros detenidos; el balance incierto de la destrucción de cultivos, puesto que se desplazan a medida que ocurre, etc. Pero la mayoría de estas dudas afecta solo a sectores minoritarios de la población. Fortalecido por sus éxitos puntuales y por el apoyo de Bush, Uribe hace más que nunca de la firmeza la piedra angular de su política, y el público mantiene, por ahora, su confianza en este aspecto.

¿Es esto suficiente para enfrentar la situación? Lo que cuenta, más que la mera relación de fuerzas militares, es la relación de fuerzas políticas.

⁴² Uribe, por lo demás, ha llegado incluso a solicitar el envío de la flota norteamericana a las costas colombianas, afirmando que las guerrillas implican un riesgo de desestabilización mundial comparable al terrorismo del Medio Oriente.

⁴³ Los países europeos habían cuidadosamente evitado implicarse. Solo a comienzos del 2004, la OEA sacó al presidente de este paso en falso, al proponer encargarse de esta tarea.

⁴⁴ La sospecha se nutre de la experiencia de los *Convivir* y del apoyo declarado de los paramilitares a su candidatura. Hablo aquí de “paramilitarización” para designar la reconversión de los paramilitares en grupos que ejercen una hegemonía local.

POLÍTICA

La confrontación no constituye en sí una política global. El corto plazo no puede reemplazar los proyectos de mediano o largo plazo, es decir, reformas que respondan a las numerosas expectativas y quiten a las guerrillas las justificaciones que les quedan. Después de varios años de deterioro del nivel de vida de los sectores más desfavorecidos, las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno y el nivel elevado de cesantía engendran un malestar que se expresa pocas veces en forma abierta, por falta de organizaciones sociales para canalizarlo, pero que no deja de ser perceptible.

Atribuir a este malestar los resultados del referéndum y el avance inédito de la oposición en los escrutinios del 25 y 26 de octubre de 2003, podría ser solo parcialmente exacto. Cabe contar también con los efectos de otro quiebre consumado por Uribe: la ruptura de las transacciones con la clase política.

5. La política antipolítica

Elegido sin el apoyo de los partidos, Uribe es proclive a la política antipolítica, que desconfía de la clase política y de las formas clásicas de representación. Se trata de otra manifestación de la relación carismática que remite a la encarnación del poder.

Eso no implica ningún populismo en el sentido tradicional: Uribe no invoca al pueblo como un todo, no se apiada por su miseria, no promete ninguna redistribución de bienes materiales o simbólicos y no hace referencia a una línea divisoria entre los de abajo y los de arriba. Su relación con las clases populares es pedagógica y heroica. El escenario por excelencia de este vínculo son los “consejos comunitarios”, que son reuniones con la población, que preside cada fin de semana, acompañado por algunos ministros, generales y responsables locales. En estas reuniones, responde a solicitudes o sugerencias de los habitantes. Transmitidas en directo por la televisión, tienen, sin embargo, algo del debate cara-a-cara. El pueblo es puesto en escena en su infranqueable diversidad. Uribe no se hace pasar allí por filántropo. Pedagogo, el presidente enseña la manera en que cada uno puede contribuir al “bien colectivo”⁴⁵. Personaje fuera de lo común, a la vez por su férrea voluntad y por su desprecio por el riesgo⁴⁶, se esmera en comunicar el heroísmo a los demás. En todo caso se propone mostrar la democracia directa en acción.

⁴⁵ En sus otras intervenciones televisivas, Uribe da también prioridad a la función pedagógica evitando la retórica habitual. Durante la campaña del referéndum, explicó en todos sus discursos el significado de cada una de las preguntas y si no logró convencer mejor, es, como veremos, porque las preguntas eran incomprensibles.

⁴⁶ Los atentados de la guerrilla en su contra han sido numerosos, antes y después de que asumiera el poder.

Uribe se ha esforzado por eludir las transacciones habituales con la clase política y ha tenido cuidado en no darle los medios para restaurar su prestigio. Al comienzo, pensó en una reforma constitucional para reemplazar el congreso bicameral por un congreso unicameral, con un número muy reducido de miembros⁴⁷. Sin embargo, tuvo que renunciar a este proyecto para obtener que el congreso aprobara la idea de un referéndum. Uribe no se ha preocupado en nada por remediar la desagregación de los partidos. A pesar de que disponía al principio del apoyo de numerosos parlamentarios, no quiso constituir un verdadero partido uribista y los dejó organizar por su cuenta diversas microempresas electorales. Dejó el partido liberal a la deriva y, lo que puede ser considerado como un hecho asombroso, este partido mayoritario, casi por esencia ligado al poder, ha terminado por declararse de oposición. Todo ocurre como si Álvaro Uribe estimara que el desorden partidista tiene la ventaja de dejarle a él solamente –y a nadie más– la responsabilidad de preservar la gobernabilidad.

No es casual que Uribe anunciara un referéndum desde el comienzo, fórmula prevista por la Constitución de 1991, pero jamás usada, y que, durante un año, desplegara lo esencial de sus esfuerzos en el ámbito político para la realización del proyecto. Sin embargo, cabe preguntarse si el objetivo consistía verdaderamente en adoptar reformas constitucionales precisas o si se trataba principalmente de dar una oportunidad al electorado para renovar su pacto de confianza con el jefe del ejecutivo. El texto que se adoptó finalmente tenía quince preguntas. El gobierno preveía que el electorado se pronunciaría acerca del conjunto, pero la corte constitucional exigió que lo hiciera separadamente para cada una⁴⁸. Las preguntas habían sido redactadas de manera tan alambicada y confusa que se prestaban para muchas interpretaciones y conformaban un inventario de lo más heteróclito. Algunas apuntan a medidas económicas y sociales coyunturales destinadas a enfrentar el déficit de las cuentas públicas. Otras, efectivamente, se referían a cuestiones institucionales, como la reforma de los partidos y los modos de escrutinio. La paradoja al respecto consistía en que la reforma propuesta hacía doble empleo con otras reformas más convincentes adoptadas poco antes por el congreso, a pesar de la hostilidad del gobierno: aumentaban el umbral mínimo para el reconocimiento de los partidos y los autorizaban a presentar una lista única, lo que debería en principio limitar muy pronto el número de partidos a siete u ocho⁴⁹.

⁴⁷ Lo que habría significado la disolución del congreso vigente.

⁴⁸ El destino jurídico del referéndum quedó por largo tiempo en suspenso. El procurador general de la nación estimó que catorce preguntas eran inconstitucionales.

⁴⁹ El umbral mínimo es de un 2% de los electores inscritos. Las listas únicas deberían contribuir a restablecer cierta cohesión de los partidos (aunque el congreso introdujo la posibilidad de un voto preferencial, al estilo brasileño, que podría permitir el resurgimiento de caciques electorales). El cálculo de escaños atribuidos a cada lista fue modificado, para hacerlo más equitativo.

POLÍTICA

En estas condiciones, no es sorprendente que el referéndum del 25 de octubre haya sido un fracaso. La gran mayoría de la clase política no se movilizó⁵⁰ e incluso los “uribistas” más convencidos a menudo expresaron reservas. La oposición y el partido liberal se proclamaron a favor de la abstención. *A fortiori*, los electores no estaban muy motivados. Ahora bien, la constitución prevé que un referéndum será adoptado solamente si recibe el apoyo de al menos el 25% de los electores inscritos y una sola de las preguntas alcanzó esta cifra.

La desaprobación hacia Uribe no es para nada completa. Todas las preguntas obtuvieron una cifra superior a la votación que lo llevó a la presidencia⁵¹ y las disposiciones que preveían pueden ser aprobadas sin mayor dificultad por vía legislativa. No obstante, Álvaro Uribe no se equivocó al interpretar el resultado como una afronta personal. Lejos de intentar ocultar su desengaño, al presentar el episodio como parte del carácter democrático del régimen, se mostró quebrantado y mal perdedor; se esforzó por obtener posteriormente la rectificación del resultado, invocando los errores del empadronamiento electoral que sirve de base para calcular el quórum⁵². Suponiendo que este no fue su objetivo inicial, el referéndum se transformó en plebiscito. Al fin de la campaña, Uribe lo definía además como un “referéndum contra el terrorismo”.

Ahora bien, las elecciones locales del día siguiente⁵³, 26 de octubre, le infligen otra contrariedad: el espectacular triunfo en la alcaldía de Bogotá —el puesto más cotizado después de la presidencia—, de Luis Eduardo (“Lucho”) Garzón, ex dirigente sindical y líder del nuevo partido de oposición, el Polo Democrático Independiente. Lo fue tanto más cuanto que pone de manifiesto fisuras crecientes en el seno del *establishment*⁵⁴. Además, candidatos independientes y opositores a Uribe ganaron en otras ciudades importantes: Medellín, Cali, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto. Otro ex sindicalista, también miembro del Polo

⁵⁰ Para obtener su apoyo, Uribe incluyó en el texto una medida que prolonga por un año el mandato de los gobernadores y alcaldes, pero la corte constitucional la rechazó.

⁵¹ Uribe fue elegido en 2002 con 5 862 255 votos; las preguntas han obtenido como promedio alrededor de 6 millones de votos.

⁵² Uribe fue personalmente al tribunal electoral para solicitar un nuevo cálculo. Las preguntas fueron, por cierto, rechazadas por cerca de un 1 ó 2%.

⁵³ Era evidentemente un reto llamar a los electores a las urnas dos días seguidos. Problemas de calendario llevaron a esta yuxtaposición, tal vez también el cálculo según el cual el interés de los electores para los desafíos locales beneficiarían el referéndum. Pero el cálculo era erróneo: preocupados por su elección, los pequeños cuadros políticos no se implicaron en un asunto que turbaba a su electorado.

⁵⁴ El principal oponente se beneficiaba del apoyo de parte del *establishment*, y en particular de Enrique Peñalosa quien, como alcalde de Bogotá de 1997 a 2000, había ganado una inmensa popularidad debido a la modernización de las infraestructuras de la capital; aliado de Uribe, no oculta sus aspiraciones presidenciales. Pero el ex presidente Ernesto Samper, la dirección del partido liberal y numerosas personalidades apoyaron a “Lucho”. Hasta *El Tiempo*, el único diario de difusión nacional, parecía vacilar entre los diversos candidatos.

Democrático Independiente, Angelino Garzón, es elegido como gobernador del Valle del Cauca. En resumidas cuentas, el *establishment* y los partidos tradicionales sufrieron múltiples derrotas en los centros estratégicos del país, y por ende el “uribismo”, que pretendía imponerse, no como partido organizado, sino como unión por sobre los partidos.

Los resultados de las elecciones locales deben ser interpretados con cierta prudencia. Aunque fragmentados y desprovistos de toda orientación política, los partidos tradicionales no han desaparecido. Los grupos que usan la etiqueta liberal siguen en el poder en 11 de los 23 departamentos, y mayoritarios en 18 asambleas departamentales e innumerables alcaldías. Los grupos que utilizan la etiqueta conservadora llegan al poder en tres departamentos. El Polo Democrático Independiente, cuyo éxito se debe a menudo a coaliciones con otros sectores políticos, está lejos todavía de ser un contrincante de peso a nivel global. Haciendo caso omiso de la proliferación de listas y reagrupando los votos de las diversas asambleas departamentales en función de las identidades partidarias, se puede calcular de manera aproximativa que los liberales “oficiales” obtuvieron 1 800 000 votos; los conservadores, 1 250 000; los “uribistas”, 1 100 000 y el Polo Democrático Independiente, 258 000. Sin embargo, este cálculo es discutible, puesto que la votación para las asambleas departamentales no traduce para nada las corrientes de opinión que se manifiestan en las elecciones de alcaldes y gobernadores y *a fortiori*, para las presidenciales. Es posible, además, que la reforma de los partidos mencionada más arriba obligue en 2006 a los partidos a superar su tendencia a la desagregación y a encontrar una cohesión mínima. El “uribismo” puede transformarse en un partido hecho y derecho.

Queda lo fundamental: comienza a surgir una oposición o, en todo caso, un voto independiente de envergadura nacional. Desde 1970, cuando el ex general Rojas Pinilla estuvo a punto de ganar la presidencia encabezando una coalición populista, la oposición había logrado solo resultados modestos. La herencia del Frente Nacional y de las subculturas partidistas explica en gran parte estos resultados, como también el apoyo de gran parte de la izquierda a la lucha armada. Después, el único avance notable de la oposición se produjo en 1990 durante la elección presidencial y sobre todo, en 1991, para la elección de la asamblea constituyente, cuando el M19 renunció a la lucha armada para convertirse en partido político. Pero esta mejora no se mantuvo. Frente a Uribe, durante la presidencial de 2002, “Lucho” Garzón, también candidato, obtuvo, con un 6% de los votos, un resultado muy honorable. Sin embargo, el éxito en las elecciones locales tiene un significado completamente diferente.

En primer lugar, estos resultados muestran que se está dando una renovación sobre la base de las administraciones locales y regionales. Hemos visto que ésta se estaba llevando a cabo desde hace diez años en

POLÍTICA

Bogotá mediante la elección sucesiva de alcaldes de gran talento: Jaime Castro, Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y nuevamente Antanas Mockus. El mismo fenómeno comenzó en otros municipios importantes o secundarios⁵⁵. Pero es la primera vez que se presenta la posibilidad de implementar una gestión moderna en tantas ciudades. Como en otros países latinoamericanos, la racionalización y la democratización avanzan gracias a la descentralización, incluso cuando no logran imponerse en el plano nacional.

En segundo lugar, surge una izquierda reformista que se substituye a la izquierda dogmática y algo sectaria de antaño. Beneficiándose del aura de Lula, se atreve a presentarse plenamente como izquierda de gobierno. En Colombia, el vuelco es tanto más importante cuanto que la simpatía hacia la lucha armada había prevalecido hasta hace muy poco para merecer el sello de izquierda. Al contrario, los nuevos representantes elegidos, “Lucho” Garzón delante, no dudan en decir que las guerrillas se encuentran en un callejón sin salida.

Finalmente, se esboza una alternativa a las orientaciones de Uribe, al poner en claro el hecho de que la firmeza no basta para definir un proyecto político global. Sin embargo, es necesario no formular conclusiones apresuradas al respecto. Diversos líderes intentan apropiarse el Polo Democrático Independiente y no está seguro que pueda preservar su cohesión.

Pero cabe sobre todo subrayar que el fracaso del referéndum y el éxito de la oposición no implican de ningún modo, por ahora, poner en tela de juicio la política de “seguridad democrática”. Al contrario, poco después del referéndum, el hecho que reciba un 80% de aprobación muestra que la adhesión a esta política es más fuerte que nunca. Uribe, sin embargo, no se equivoca al tomar en serio la advertencia. Las dos elecciones demuestran que si la relación carismática opera en el ámbito del orden público, no funciona en otras dimensiones políticas. El cheque en blanco es solo parcial: deja de ser válido cuando parece significar una amenaza de confiscación excesiva del poder.

Conclusión

El problema planteado inicialmente se refería a una posible deriva autoritaria del actual presidente.

Álvaro Uribe Vélez siempre ha negado querer infringir las reglas democráticas. Su objetivo consiste en debilitar las guerrillas: proclama que ni

⁵⁵ Por ejemplo, Antonio Navarro, ex dirigente del M19, interrumpió provisoriamente su carrera nacional para postular a la alcaldía de Pasto, la capital del Nariño, y su gestión ha sido notable. Podría postular de nuevo a la presidencia.

la adopción de un estatuto antiterrorista, que confiere a la fuerza pública facultades de policía judicial, ni las negociaciones en curso con los grupos paramilitares, que en el contexto actual, parecen garantizarles una inmunidad casi total, son medidas que van más allá de lo que se adoptó en varios países democráticos. Repite insistentemente y con buenos argumentos que son en realidad los grupos ilegales, los que amenazan la democracia, al desarrollar los cultivos de droga, al recurrir al terror, al multiplicar los raptos y masacres, al destruir el tejido social y al desestabilizar las instituciones. Sólo se trata, en su opinión, de restaurar la autoridad sin la cual las reglas democráticas son ilusorias.

Sin embargo, no se puede descartar una eventual deriva autoritaria a lo Fujimori. El apoyo masivo que recibe para la aplicación de la política de “seguridad democrática”, puede conducir a Uribe a extralimitarse respecto a ciertas restricciones institucionales, como lo sugiere el término “relación carismática” usado aquí. Uribe no ha pretendido poner su popularidad al servicio de las indispensables reformas institucionales y sociales. Al dejarse tentar por las seducciones de la antipolítica, no ha hecho nada significativo para remediar el deterioro de los mecanismos de representación política. Mencionamos antes el carácter plebiscitario del referéndum. Además de gobernar de manera muy solitaria y de no tener gusto por la concertación, avala ahora un proyecto autorizando la reelección inmediata del presidente saliente, como si considerara que ninguna otra persona aparte de él puede llevar a cabo el único proyecto que tiene importancia: acabar con las guerrillas.

Pero otros factores mencionados en estas páginas incitan a no aceptar demasiado rápido este diagnóstico.

Por cierto, uno de ellos es el contexto internacional. La apuesta de Uribe se basa en la completa solidaridad del equipo de Bush y las elecciones norteamericanas influirán por cierto en la prosecución de su política. En el congreso norteamericano, se manifiestan ya numerosas reticencias en relación con las modalidades de aplicación del Plan Colombia. Las reservas de la Unión Europea son aún más explícitas y tienen cierto impacto.

Sin embargo, los frenos para evitar una deriva autoritaria son principalmente internos. La cultura política de la “transacción”, que constituye tal vez el verdadero contenido de la “tradición liberal”, no puede acomodarse fácilmente con la concentración del poder en una sola persona.

La desorganización de los partidos políticos no implica una pérdida de influencia de parte de la clase política y ésta no está dispuesta a dejarse arrebatar sus prerrogativas, empezando por la obligación para el jefe del

ejecutivo de negociar con ella⁵⁶. El fracaso del referéndum se debe al hecho que Uribe pretendió ignorarla. La clase política tiene poco afán de aprobar las medidas económicas restrictivas previstas en el referéndum y aún menos de admitir el principio de reelección inmediata⁵⁷. Sin cuestionar la política de seguridad democrática, algunas de sus figuras más influyentes son proclives a moderarla, por ejemplo a través de un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados e incluso reanudando el diálogo⁵⁸. Uribe puede difícilmente ignorar la clase política, a menos que se arriesgue a chocar con resistencias cada vez más fuertes⁵⁹.

Los resultados de las elecciones regionales que tuvieron lugar después del referéndum muestran que la amplia aprobación a la línea de “firmeza” de parte de la población, no significa el mismo apoyo respecto a otros aspectos de la gestión de Uribe, y menos aún en lo que se refiere a otorgarle un mandato incondicional y global. El legado de desconfianza hacia el poder y el Estado no puede borrarse de golpe. La misma adhesión a la “firmeza” necesita éxitos concretos para mantenerse. Si éstos no se confirman, la opinión podría darse vuelta y preconizar de nuevo la vía del compromiso negociado. Tales vuelcos no han faltado en el pasado.

Sin duda, nunca un presidente había logrado congregarse tanto apoyo a la idea de invertir la relación de fuerzas con las guerrillas antes de reiniciar el diálogo. No se puede negar que marcó puntos en este aspecto, no solamente a causa de las derrotas infligidas a las guerrillas, sino por la total pérdida de credibilidad política de parte de ellas. ¿Es casual, sin embargo, que haya surgido en este preciso momento una oposición que se reclama de la democracia, así como de un reformismo social y que ciertos dirigentes tradicionales del partido liberal se hayan unido a esta oposición?

Si dicha oposición, sin renegar de sus principios, lograra esbozar una solución negociada que permita a las guerrillas salvar las apariencias, la política de “firmeza” podría perder su atractivo y la “cultura de transacción” volver a imponerse.

⁵⁶ Después del referéndum, Uribe tuvo que deshacerse de Fernando Londono, su ministro del interior todo-poderoso y muy reaccionario, criticado por casi toda la clase política.

⁵⁷ Por lo demás, después del referéndum, el congreso se manifestó en contra de este principio. Se volvió a plantear a comienzos del 2004, pero se enfrenta con una oposición poderosa.

⁵⁸ Los ex presidentes Alfonso López Michelsen y Ernesto Samper preconizan incansablemente esta vía.

⁵⁹ Para reemplazar a Fernando Londono, Uribe nombró al presidente del gremio del comercio, quien, en diferentes ocasiones, se mostró partidario del diálogo con el ELN, la otra organización guerrillera, y hace gala de un perfil de conciliador político hábil.

Referencias bibliográficas

- Blanquer Jean-Michel. 2002. "Colombie: les droits sans l'État", *Problèmes d'Amérique Latine* 44: 49-62.
- Bushnell David. 1996. *Una Nación a pesar de sí misma, De los tiempos precolombinos a nuestros días*. Bogotá: Planeta.
- Dávila Ladrón de Guevara, Andrés. 2002. *Democracia pactada, el Frente Nacional y el proceso constituyente del 91*. Bogota, IFEA.
- Dix, Robert H. 1967. *Colombia: The political dimensions of change*. New Haven y Londres: Yale University Press.
- González, Fernán, Bolívar, Ingrid et al. 2003. *Violencia política en Colombia, De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá, CINEP.
- Gutiérrez, Francisco et al. 2002. *Degradación o cambio, evolución del sistema político colombiano*, Bogotá, Norma.
- Gutiérrez, Francisco. 2003. "Les partis politiques et la démocratie en Colombie (1958-2002), Une histoire naturelle du vice et de la vertu", *Problèmes d'Amérique Latine* 49: 39-70.
- Hartlyn, Jonathan. *La política del régimen de coalición, La experiencia del Frente Nacional en Colombia*. Bogotá, Tercer Mundo Editores.
- Leal Buitrago, Francisco. 1984. *Estado y Política en Colombia*, Bogotá: Siglo XXI Editores.
- Palacios, Marco. 1995. *Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1994*. Bogotá, Noram.
- Pécaut, Daniel, *L'ordre et la violence, Histoire socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953*. 1987. Paris, Éditions de l'EHESS (versión en castellano: *Orden y violencia, Historia sociopolítica de Colombia entre 1930 y 1953*. 2001. 2ª edición, Bogotá, Norma).
- Pécaut, Daniel, *Violencia y Política en Colombia, Elementos de reflexión*. 2003. Medellín, Hombre Nuevo Editores.
- Pécaut, Daniel, *Midiendo fuerzas, Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. 2003. Bogotá, Planeta.
- Pinzón de Lewin, Patricia, *Pueblos, regiones y partidos*. 1989. Bogotá, Edición Uniandes.
- Pizarro Leongómez, Eduardo. 2002. "La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las microempresas electorales". En Francisco Gutiérrez et al., *Degradación o cambio, Evolución del sistema político colombiano*, pp. 357-401.
- Pizarro Leongómez, Eduardo. 1997. "¿Hacia un sistema multipartidista? Las terceras fuerzas en Colombia, hoy". *Análisis Político* 31.
- "Diez años de la Constitución de 1991, Orden nuevo, viejo régimen". Julio 2001. *Revista Foro* N° 41.
- Safford, Frank y Palacios, Marco. 2002. *Colombia, Fragmented Land, Divided Society*, New York, Oxford, Oxford University Press.
- Ungar Bleier, Elisabeth. Oct-déc. 1998. "Colombie: les élections de 1977-199, entre changement et continuité", *Problèmes d'Amérique Latine* 31: 25-50.
- Vásquez de Urrutia, Patricia (ed.). 1989. *La democracia en blanco y negro: Colombia en los años ochenta*. Bogotá: Ed. Uniandes-Cerec.